

PUNTOS DE VISTA ACTUALES SOBRE EL PAPEL ECONÓMICO DEL ESTADO

Tomàs Ferrandis Moscardó

2022-10-15

Contents

1. INTRODUCCIÓN	2
2. EL PAPEL ECONÓMICO DEL ESTADO	2
Estructura del trabajo	3
Pero ¿qué vamos a considerar como papel del Estado?	3
3. PIKETTY, EL ESTADO SOCIAL PARA EL SIGLO XXI	3
Razones para la intervención del Estado	3
Salvar el capitalismo desde el Estado, de nuevo	4
El regreso al Estado	4
La redistribución moderna	5
Impuestos y progresividad fiscal	5
La amenaza de la competencia fiscal y la regresividad fiscal	6
Impuesto mundial sobre el capital. La utopía de Piketty	6
Conclusión	7
4. MAZZUCATO, LA LECCIÓN DEL COVID-19	7
La crisis del Covid-19	7
Errores arrastrados desde 2008	7
Las Ayudas a las empresas deben estar condicionadas	8
El inversor de primer recurso	8
El Programa de Empleo Público	9
Dividendo ciudadano	9
Feudalismo digital	9
Cadena de suministro	9
Asociación público-privada. Interés general	10
Política verde	10
La desigualdad. Hogares en la brecha digital	10
Redistribución. Nueva política fiscal y subsidio	10
Conclusión	11
5. McCLOSKEY, CONTRA EL ESTATISMO	11
Contra la protección	11
Contra la regulación del Estado	11
La falacia de la cadena de suministro	12
Contra la redistribución de Estado	12
Contra todo proteccionismo	13
El desempleo y la libertad de mercado	13
Conclusión	13

1. INTRODUCCIÓN

Pronunciarse sobre el papel del Estado en un campo tan complejo como la economía no es tarea fácil. De hecho, no encontraremos precisamente unanimidad de opinión al respecto. Unos economistas son detractores de la intervención del Estado y, a la vista de los fallos del gobierno, concluyen que puede ser peor el remedio que la enfermedad. Otros, en cambio ven en los fallos del mercado y en la ausencia de un Estado fuerte, el germen de las recientes crisis económicas mundiales. Lo más preocupante, según los pronósticos de estos últimos, es que si no se adoptan nuevas políticas públicas en favor de un mayor dirigismo o responsabilidad del Estado para corregir estos fallos tendremos más y peores crisis.

Para el presente trabajo hemos optado por exponer puntos de vista diferentes de economistas contemporáneos de renombre. Desde partidarios de un rol activo del sector público a los contrarios. El prestigioso economista Joseph E. Stiglitz resume esta dicotomía explicando que hay economistas que creen en la política monetaria como único instrumento, pero en cambio otros creen que hace falta más y defienden políticas fiscales más duras (Stiglitz, 2020: 255).

Podremos observar que los más intervencionistas explican la crisis del 2008 como causada por los fallos del mercado a la vez que ponen en evidencia la incompleta resolución por parte de los Estados y nos urgen, ahora, a cambios en la política estatal para evitar nuevas crisis económicas. Se trata de economistas que reaccionan y plantean soluciones al “fallo del mercado” de forma análoga a como lo hizo Keynes para afrontar la Gran Depresión. Episodio del siglo XX, por cierto, al que recurren habitualmente como argumento. Es decir, que en todos ellos hay una voluntad clara de salvar el sistema económico (y político a la vez) mediante la recuperación de papel del Estado o, mejor aún, de un nuevo papel reforzado.

Por contra, los economistas nostálgicos del *laissez-faire*, suelen observar la Historia con una visión amplia y difusa. Vuelven a los orígenes del liberalismo con la retórica del “innovismo” milagroso y el individualismo libre para concluir con un balance final siempre positivo donde todo se lo debemos al mercado libre de intervención pública y todo se soluciona con más mercado y menos intervención pública.

2. EL PAPEL ECONÓMICO DEL ESTADO

En los siguientes apartados veremos la visión de economistas actuales sobre cuál debe ser (o cual no debe ser) el papel del Estado en la economía. Entendido este como el conjunto de políticas gubernamentales, decisiones del sector público en general o de los mismos bancos centrales.

¿Por qué elegimos a estos economistas?

Algo en lo que todos estaremos de acuerdo es que nos acordamos más del papel del Estado como ciudadanos o interesados en la politología cuando la economía no va bien. En plena bonanza económica un libro sobre el despilfarro público no tiene el mismo éxito que en plena recesión. Ni siquiera la propuesta de una renta mínima garantizada despierta el mismo interés entre la ciudadanía. Quizás por la misma razón, los dos economistas elegidos en primer lugar, Piketty y Mazzucato, son autores cuyos trabajos se han centrado o desarrollado a partir del estudio de las crisis económicas recientes. Nos hablarán de lo que más intensamente hemos vivido en economía: la crisis del 2008 y la derivada de la pandemia del Covid-19.

Respecto a los otros economistas elegidos y que defienden un enfoque distinto sobre la función del Estado, su elección obedece a razones distintas. En primer lugar, McCloskey aporta una visión netamente liberal no solo en los términos económicos. Profesora, economista e historiadora, en sus numerosos artículos nunca escatima en críticas contra la paranoia militarista de la derecha, contra la guerra de la droga o a favor de todos los derechos de las personas, comenzando por el de emigrar. Esto le da una pátina de coherencia a su discurso liberal¹. Pero sobre todo es su manifiesta oposición a la visión socialdemócrata de Piketty así como

¹ McCloskey además de feminista es defensora de todas las libertades civiles, ha publicado artículos en defensa de la despenalización del consumo de drogas y la reducción de gasto en seguridad.

las críticas a Mazzucato lo que obliga a incluirla en este trabajo.

Aparecen referencias a otros dos economistas contemporáneos de ideas claramente distintas. El liberal clásico, Guy Sorman, francés y norteamericano, nos aporta una interesante comparación sobre la visión tan distinta del Estado y del mercado que tienen en EEUU y en Europa con la excepción que siempre apunta del Reino Unido; algo que puede ayudarnos un poco a entender otra crisis reciente, la del Brexit. Si Sorman participó activamente en la política francesa junto al presidente Chirac, el Nobel² Stiglitz, fue asesor del presidente Clinton, además de presidente senior del Banco Mundial. De él se suele decir que fue el economista más citado en 2008 y suyo es el apelativo de “fundamentalistas del libre mercado” en sus críticas al neoliberalismo y la globalización.

De ambos, Stiglitz y Sorman, elegimos algunas opiniones que nos sirven para reforzar, contradecir o establecer relaciones entre las expuestas por los demás. No en vano ambos han participado de la política económica de Estado asesorando y gestionando en distintos niveles y esferas del poder. Son de todos los citados anteriormente, los únicos que han sido protagonistas del intervencionismo o no-intervencionismo del Estado, por lo tanto a ellos les asignamos la tarea de reforzar o refutar las opiniones de los demás.

Estructura del trabajo

A partir de los trabajos de Piketty “El capital en el siglo XXI” haremos un repaso de los peligros que acechan y las dificultades que atraviesa el Estado del bienestar en su tarea fundamental de asegurar aquellos derechos que los ilustrados empezaron a reivindicar y las conquistas sociales posteriormente ganadas.

Además, veremos las propuestas del economista francés ante dos problemas: el peligro que se cierne sobre el Estado del bienestar y la posibilidad de nuevas crisis.

Este apartado, que será el de mayor dimensión, se complementará con la aportación del ensayo “No desaprovechemos esta crisis” de Mazzucato con sus críticas y sus propuestas en una línea similar de salvar el sistema económico reforzando y a la vez renovando, el papel del Estado.

Como contrapunto, resumimos los argumentos principales de dos economistas liberales contrarios a la intervención del sector público en la economía a partir de los artículos periodísticos de McCloskey recogidos en “¿Por qué el liberalismo funciona?” y el ensayo de Guy Sorman “La economía no miente”. También a lo largo del texto encontraremos alguna referencia a “El capitalismo progresista” de Joseph E. Stiglitz servirán como aclaración de las tesis expuestas por otros autores.

Pero ¿qué vamos a considerar como papel del Estado?

En adelante, entenderemos el papel o la intervención del Estado en la economía como el conjunto de tres grandes funciones. Por una parte, consideremos la acción recaudatoria vinculada a la prestación de servicios propios de las actuales democracias en tanto que Estados sociales. Por otra parte, tendríamos la función reguladora y de control de toda la actividad económica y, en tercer lugar, asumiremos el papel del Estado como productor o poseedor de capital.

3. PIKETTY, EL ESTADO SOCIAL PARA EL SIGLO XXI

Tras analizar las desigualdades sociales desde el siglo XVIII, Thomas Piketty concluye que fueron las grandes guerras las que transformaron la antigua estructura de desigualdades. Pero al contrario de lo que cabía esperar, en el siglo XXI, las desigualdades patrimoniales han aumentado hasta un nivel intolerable.

Razones para la intervención del Estado

Al comparar la crisis de 2007-2008 con la Gran Depresión vemos que la padecida en este siglo pasado tuvo consecuencias menos dramáticas. El desplome de la producción no superó el 5% en gran parte de Occidente mientras que en los años treinta del siglo pasado el desplome y cierre de empresas fue un hecho generalizado,

²1 Premio de Ciencias Económicas del Banco de Suecia en Memoria de Alfred Nobel.

además hubo un desarrollo posterior en los países emergentes. Dos grandes diferencias entre lo que pasaría a llamarse la Gran Recesión de 2008 y la Gran Depresión de los años 1930 del siglo XX.

La razón de este menor impacto está precisamente en el papel que jugaron los gobiernos y los bancos centrales ante la crisis. Durante la Gran Depresión el presidente Hoover siguió a rajatabla la máxima de “liquidar” cualquier empresa débil. En cambio, en la crisis de 2008, hubo una respuesta del Estado inmediata: se intervino.

La política financiera de los gobiernos y la política monetaria de los bancos centrales convirtió a los Estados ricos en prestamistas de última hora ante una situación de pánico, se pudo salvar al sistema financiero. Los Estados se implicaron creando una liquidez que mantuviese vivo al sistema bancario. Imperó a nivel mundial un pragmatismo y, sobre todo, se actuó.

Ahora bien, esta actuación, según el economista francés, no es una solución al problema estructural que originó la crisis. Una crisis incubada en la opacidad financiera y alimentada con un aumento anterior de la desigualdad. De hecho, Piketty prevé que vuelvan más crisis similares al no haberse abordado de raíz estos problemas.

Salvar el capitalismo desde el Estado, de nuevo

A partir del fin de la II Guerra Mundial los Estados empiezan a tener más vida económica y social, lo que trae paralelamente un debate sobre este protagonismo que se acentúa en los años 1970 y 1980 y, posteriormente desde los EEUU³.

Ya entrados en el siglo XXI, tras la crisis de 2008, aparece un nuevo movimiento que acusa de todos los males al mercado. Tenemos pues dos puntos de vista irreconciliables que podrían escenificarse en la batalla que Grecia tuvo que lidiar en el seno de la UE: los *antimercado* y los *antiestado*.

Piketty reconoce parte de razón de ambos planteamientos y propone inventar nuevas herramientas para retomar el control de un capitalismo financiero anárquico, renovando absolutamente los sistemas de impuestos y gastos, que son “el corazón del Estado social moderno” hoy en día tan ininteligibles que solo pueden generar un peligroso rechazo.

Esa idea de renovar el papel del Estado con un nuevo sistema de impuestos y gastos para salvar la eficacia, a la vez que el control de sistema financiero. Ese posicionamiento entre extremismos, *antiestado* y *antimercado*, que pretende salvar el capitalismo desde la iniciativa Estatal guarda cierto paralelismo con la figura de Keynes.

El regreso al Estado

Piketty aboga por el regreso del Estado incidiendo en la función de recaudación vinculada a la prestación de servicios, así como también en la necesidad de una reglamentación y un arbitraje transparente más que en el papel del Estado como productor o poseedor de capital.

Es evidente, y puede usarse como argumento contrario a un “regreso del Estado”, que las contribuciones obligatorias se han incrementado de forma incesante desde 1870. El Estado liberal o de derecho que apenas tenía que afrontar el gasto militar y una tarea de poco más que asegurar el orden y garantizar el cumplimiento de la ley nada tiene que ver con el desarrollo posterior a la II Guerra Mundial del Estado social con su sistema sanitario público, educación, prestaciones por desempleo y jubilación entre otras. Este aumento de presión fiscal obedece al aumento de responsabilidades del Estado con la ciudadanía.

La mejora de prestaciones cualitativamente y cuantitativamente tiene su plasmación en el presupuesto y supone un reto para el sector público que aumenta con el paso de los años. El reto empieza por el envejecimiento de la población y su repercusión en el sistema de pensiones y las políticas sociales, algo que se agrava con el aumento de la pensión media.

A o que hay que sumar la necesidad de un sistema educativo que evolucione a la par que la complejidad de la sociedad y un sistema sanitario más sofisticado cada año. Con todo, la simple estabilidad presupuestaria en

³1 Especialmente por el Tea Party, un movimiento político conservador y liberal libertario.

el sector público ya supone toda una proeza.

Respecto a la fijación de reglas y la observancia de éstas, en cambio, podemos advertir que la regulación de los mercados financieros desde 1950 a 1970 era más estricta que desde 1980 en adelante (Piketty, 2014). Esta evolución no puede pasar desapercibida tras la crisis del 2008. La globalización y, previamente, el triunfo del *tatcherismo* ha erosionado el rol regulador del Estado.

Además, el Estado, en su papel de productor o poseedor de capital, ha perdido prácticamente todo el peso con las privatizaciones realizadas desde finales del siglo XX especialmente del sector industrial y financiero. Mazzucato, de quien hablaremos más tarde, llega a señalar la paradoja irónica de que el sector público ha llegado a externalizar tanto que no es capaz de llevar adelante los propios procedimientos o contratos de externalizaciones (Mazzucato, 2021).

En el contexto español, los ingresos por variación de activos financieros empezaron en la década de 1980 bajo el gobierno socialdemócrata de Felipe González y se incrementaron con el cambio de gobierno y la entrada del PP con José María Aznar (Vergés, 1999). Miles de millones de pesetas, después euros, que engrosaron el Capítulo VIII de los Presupuestos Generales del Estado de esos años para hacer frente al déficit y la deuda. Para los gobiernos de Felipe González estas decisiones se debían a exigencias de Europa y se maquillaban como políticas modernizadoras. En el caso del presidente Aznar y los gobiernos del PP, eran puntos de su programa electoral y respondían más a la ideología. Estas decisiones de política económica de Estado, pese a su importancia, no generaron demasiada polémica ni debate social. Cabe resaltar que, posteriormente, cuando el gobierno de Zapatero (PSOE) privatizó alguna empresa si hubo polémica a nivel social: las redes sociales y el panorama de la prensa había cambiado.

La redistribución moderna

Cuando hablamos de redistribución en nuestro Estado de bienestar no nos referimos a una redistribución de riqueza en un sentido literal. No se trata de “quitar a los que más tienen para dar a los pobres”. La redistribución se entiende por un mecanismo que asegura la igualdad a la hora de acceder a bienes y servicios fundamentales. Una igualdad entendida en términos de derechos reales, la implementación de los derechos recogidos en declaraciones o preámbulos de Constituciones, mediante leyes y servicios contemplados los presupuestos públicos. En el terreno teórico sobre los derechos para acceder a la felicidad existe un absoluto consenso formal. El debate se presta cuando se trata de poner en práctica esa vieja retórica de la Declaración de Derechos del Hombre y Ciudadano esta es la cara verdadera del debate sobre el papel del Estado en la economía; la financiación, la presión fiscal.

Así podemos decir que la redistribución actual consiste en financiar los servicios públicos elementales, jubilaciones, prestaciones por desempleo y otros subsidios y ayudas similares para que los que más desaventajados y desaventajadas (no olvidemos la brecha salarial aún existente entre mujeres y hombres).

Piketty alerta sobre la necesidad de buscar sin cesar la eficacia del sector público. Centrarse en mejorar el funcionamiento de centros sanitarios o educativos; el cálculo de las pensiones o subsidios por desempleo etc. si no queremos que el consenso político sobre el actual nivel de contribución se rompa y el Estado social entre en peligro.

Impuestos y progresividad fiscal

Piketty nos recuerda que “El impuesto no es un asunto técnico, sino eminentemente político y filosófico, sin duda el primero de todos” (Piketty, 2014), algo que se demuestra si, por ejemplo, repasamos el protagonismo que los impuestos tuvieron como detonantes en la Revolución Francesa⁴ y la Revolución Americana⁵

Impuestos tenemos típicamente de tres tipos. Los que afectarían al ingreso, los que afectarían al capital y los que afectarían al consumo. En España serían, por definición, el IRPF, Impuesto de Sociedades; el Impuesto sobre el patrimonio y, finalmente, el IVA junto a los impuestos especiales.

⁴1 La supresión del feudalismo se caracterizó sobre todo por la implantación de la igualdad fiscal en 1789 el fin de los privilegios en materia fiscal.

⁵2 La decisiva “not taxation without representation” de las colonias americanas con la que empezó la rebelión contra la Metrópoli al negarse a pagar impuestos aprobados por el parlamento inglés.

Por otra parte, tendríamos las cotizaciones a la seguridad social para hacer frente a las jubilaciones y prestaciones por desempleo sin entrar en las diferencias entre países sobre prestaciones o financiación.⁶

El criterio alrededor del cual suele pivotar el debate entre liberales y socialdemócratas es este tema tan crucial es sobre la progresividad o, por el contrario, la proporcionalidad de cada impuesto. Si aplicamos la misma tasa al ingreso, capital o consumo para todos, hablaremos de un impuesto proporcional. Si, en cambio, la tasa varía en función del ingreso, capital o consumo, siendo directamente proporcional o por tramos, estaremos ante un impuesto progresivo.

La amenaza de la competencia fiscal y la regresividad fiscal

Cuando afrontamos el impuesto al capital desde la óptica de la progresividad, la principal amenaza es la llamada competencia fiscal en el contexto actual de libre circulación de capital. Es decir, la aplicación de normas fiscales que llevan a cabo países o regiones destinadas a captar inversiones y actividades empresariales de fuera de sus fronteras o límites geográficos en el marco de la globalización.

Según explica Piketty, asistimos a una carrera acelerada hacia el precipicio reduciendo impuestos sobre ingresos a las empresas, pero manteniendo, a la par, la presión sobre los ingresos por el trabajo. Este último es el que aporta un mínimo de progresividad en la tasa impositiva global. Una progresividad que no llega a contrarrestar el efecto de la proporcionalidad que causa el peso mayor del impuesto al consumo y las cotizaciones sociales. Con lo cual, gran parte de la tasa impositiva global la asumen las capas sociales más débiles: podemos hablar pues de impuestos regresivos.

El riesgo de esta regresividad fiscal no es solo el de acelerar la desigualdad social y retroceder hacia la concentración del capital en términos similares o superiores a antes de 1945 sino que además puede crear una reacción de rechazo del sistema fiscal actual por parte de las clases medias.

Como afirma Piketty “es vital para el Estado social moderno que el sistema social que lo sostiene conserve un mínimo de progresividad, o cuando menos que no llegue a ser claramente regresivos en la cima”.

Los impuestos progresivos son el pilar del Estado social. Fueron la base para su construcción el siglo XX y son indispensables para su mantenimiento en el siglo XXI. Entonces, ¿cómo resolvemos el problema que nos plantea la competencia fiscal?

Impuesto mundial sobre el capital. La utopía de Piketty

Para responder a la pregunta anterior y, así, poder lanzar una propuesta de “reactualización del programa social demócrata y fiscal liberal del siglo pasado” deberá hacer falta algún instrumento nuevo, sin duda.

De igual forma que en el siglo XX se introdujeron como novedades en la política fiscal de los Estados, el impuesto progresivo sobre el ingreso y el impuesto progresivo a las sucesiones y fueron las herramientas que permitieron las políticas del Estado social, ahora, ante la amenaza de la competencia fiscal, Piketty propone un nuevo impuesto mundial que podría compatibilizarse o directamente o progresivamente sustituir los nacionales.

El primer objetivo del nuevo impuesto sería regular de forma eficaz cualquier crisis bancaria o financiera gracias a proporcionar una información y transparencia financiera internacional. Recordemos que la opacidad del sistema financiero está en la raíz de la crisis del 2008 y puede repetirse.

El segundo objetivo sería la redistribución justa dentro de los países de la riqueza. Hay que tener en cuenta que la mayoría de los países ya gravan el capital, pero sólo el patrimonio inmobiliario y, por norma general sin la posibilidad de deducir el valor del préstamo del valor del bien. Los activos de este nuevo impuesto serían tanto inmobiliarios, financieros como empresariales.

El tercer y más importante de los objetivos sería el de regular el capitalismo frenando la deriva hacia cuotas cada vez mayores de desigualdad y financiando el Estado social.

⁶1 En algunos países las cotizaciones sociales cubren más gastos sociales como Francia. En otros como los países nórdicos se cubre parte del gasto social con el impuesto sobre la renta.

Estaríamos hablando de un nuevo impuesto progresivo sobre el capital a nivel mundial que permitiría una redistribución de la riqueza, generaría transparencia democrática y financiera sobre las fortunas; algo imprescindible si queremos que el sistema financiero y sus flujos a nivel internacional estén regulados.

Conclusión

La propuesta de Piketty supondría una actualización o revisión del papel económico del Estado en su doble función reguladora de la economía por una parte y la de prestar servicios a la ciudadanía. Una propuesta para salvar, de nuevo, el capitalismo.

4. MAZZUCATO, LA LECCIÓN DEL COVID-19

Mazzucato reclama un Estado reforzado en sus tres grandes objetivos: el de prestar servicios y la necesaria provisión presupuestaria, el de vigilar que el interés general rija en todas la reglamentación y acuerdos, sobre todo si participa el sector público, a la vez que reivindica sin tapujos el papel del Estado como productor o poseedor de capital.

La crisis del Covid-19

La crisis del Covid-19 ha funcionado como una radiografía perfecta sobre la estructura de nuestra economía revelando el papel teórico, genuino si se quiere, del Estado en contra del “mandato” del mercado impuesto desde la década de los años 1980. De la radiografía, la profesora de economía italiano-estadounidense Mariana Mazzucato señala tres manchas extrañas en nuestro sistema.

La primera de ellas afecta a la sanidad pública. Aquellos países ricos con un sistema sanitario público debilitado por las privatizaciones anteriores al Covid-19 han salido peor pagados: sus ciudadanos han sufrido las consecuencias de la enfermedad y la muerte sin atención.

La segunda mancha obedece al error en las asociaciones público-privadas. La excesiva y relajada confianza en las empresas privadas cuando se trataba de buscar el bien común ha dejado al Estado sin recursos frente a la calamidad.

No podemos dejar pasar por alto esta triste oportunidad que nos brinda la crisis triple (sanitaria, económica y ecológica) para “repensar para qué sirven los gobiernos” y “hacer un capitalismo distinto”.

La economista propone una solución que, a diferencia de aquel New Deal al que suele recurrir como ejemplo, no se limita a la intervención del Estado en determinados sectores de la economía. Mazzucato lanza su idea de enfocarlo todo a lo que ella denomina “misiones”: grandes objetivos a cumplir a los que debe dirigirse principalmente la actividad económica. Una idea que suma a la reivindicación por la recuperación del papel inversor del Estado y la utilidad social de las empresas públicas si caer en el estatismo socialista.

Errores arrastrados desde 2008

Al igual que Piketty, también la economista americana señala errores graves en la política pública desde la crisis del 2008. Lo que podríamos ya se ha señalado como una mala solución. Estos errores, con la crisis del Covid-19 se han acentuado complicando enormemente la tarea de los gobiernos y de todo el sector público a la hora de afrontar la crisis.

De forma esquemática podríamos citar como errores los siguientes:

- Los gobiernos conceden créditos a empresa privadas cuando la deuda privada es ya demasiado elevada.
- El sector privado estaba excesivamente “financiarado”. Muchas corporaciones prefirieron por ello recompensar a los accionistas mediante la compra de acciones antes que reinvertir pensando en el futuro: investigación, formación o bienestar para los empleados.
- La austeridad en los gobiernos, sobre todo desde 2008, como solución a la crisis ha debilitado a los servicios públicos sanitarios y sociales.

- En los rescates que se hicieron de empresas y de la banca no se condicionaron en absoluto en beneficio de persona o del medioambiente.
- Tampoco se han dirigido bien las asociaciones público-privadas olvidando el interés general en la orientación de los objetivos ni en la inversión o redistribución posterior de los beneficios.

A partir de esta mirada crítica, Mazzucato, nos insta a aprender la lección del 2008 y realiza sus propuestas ante la situación actual.

Las Ayudas a las empresas deben estar condicionadas

En la era post COVID el Estado ha recuperado un protagonismo primigenio al volver a ser el inversor de primer recurso. Desde transferencias directas, exenciones y bonificaciones fiscales, créditos con buenas condiciones avalados por el Estado y una política expansiva de los Bancos Centrales.

Estas ayudas deberían estar condicionadas, a diferencia de lo que se hizo en la anterior crisis, al mantenimiento de compromisos de las empresas con los trabajadores y también el medio ambiente para hacer frente a la crisis ecológica. El mantenimiento de plantilla por ejemplo ha sido una de las condiciones que en algunos países esta vez sí han impuesto⁷. Algunos de los sectores beneficiados por las ayudas son estratégicamente muy importantes para conseguir objetivos como los plasmados en el Acuerdo de París (automóvil o la aviación comercial) para la reducción de emisiones de CO2.

Mazzucato defiende estos condicionamientos como la oportunidad que no deberíamos desaprovechar para orientar la economía y corregir los errores del pasado. Entiende que no se trata de “dirigismo”, sino de visión a largo plazo: de futuro.

El caso de la investigación de las vacunas en el Covid-19 ha puesto de relieve la enorme cuantía de millones que los laboratorios han ingresado de las arcas públicas en todos los países, especialmente EEUU a lo largo de décadas para investigación en vacunas, sobretodo.

Pero no únicamente es en el sector de laboratorios farmacéuticos, donde se ha financiado la investigación con recursos públicos por eso Mazzucato por este motivo defiende que además los rescates desde el momento en que se hacen con dinero público deberían condicionarse al reparto futuro de dividendos entre los ciudadanos.

El inversor de primer recurso

El corolario liberal que asumieron a partir de la segunda mitad del siglo XX las democracias occidentales respecto al papel inversor del Estado, Mazzucato lo resume en tres puntos:

- La inversión pública es un despilfarro.
- La economía de mercado tiende al pleno empleo.
- La inversión pública solo debe aparecer cuando haya que corregir un fallo de mercado.

A lo cual la economista se opone defendiendo que la “capacidad del Estado es fruto de la inversión paciente en el seno de las instituciones públicas, no del dinero lanzado a la economía desde un helicóptero en tiempo de crisis”.

La crisis del 2008 evidenció la debilidad del Estado y la del Covid-19 lo ha vuelto a hacer. Para Mazzucato “Desde la crisis del 2008 financiera, las economías han operado muy por debajo de su plena capacidad”. La política monetaria expansiva sirvió para poner dinero en manos de quienes ya tenían activos y ningún interés en gastarlo en actividades vinculadas a la economía real.

“Ahora es necesaria una nueva era de inversión pública para conformar de nuevo nuestro paisaje tecnológico, productivo y social”. Lo importante no es tanto el crecimiento de la economía sino la dirección en la que crece. Esto implica necesariamente que hay que volver a poner alguien al timón del Estado.

⁷1 Alemania ha exigido el mantenimiento de los empleos y Dinamarca que las empresas no estén domiciliadas en paraísos fiscales.

El Programa de Empleo Público

El pleno empleo es un bien público. Destinar el máximo posible de recursos en conseguirlo supone tener más consumidores y usuarios con posibilidad de gastar y activar la economía lo contrario que ocurre cuando el número de desempleados aumenta.

La propuesta de Mazzucato del Programa de Empleo Público tiene que ser adaptada a la economía del país como lo era el programa de empleo puesto en marcha por Roosevelt y tendrá cuatro fines:

- Crear un stock laboral que dependerá del ciclo económico
- Sustituir la solución cortoplacista e improductiva del subsidio por desempleo por una empleabilidad acompañada de un programa de formación profesional. Apostando por el largo plazo y el capital humano. Una idea que también defiende Stiglitz (Stiglitz, 2020:247).
- Asegurar una remuneración fija superior al salario mínimo de forma que, incluso se podría prescindir de éste.
- Orientar las actividades a políticas de cuidado del medioambiente, las personas o la comunidad.

Mazzucato propone que sea el Estado quien sufrague el programa, aunque luego sean administraciones locales quienes administren. Evidentemente la traslación de esta idea a cada país se debería hacer atendiendo a su organización territorial y distribución de competencias. La idea que parece defender es que la administración más cercana al individuo y la realidad social es la más adecuada para gestionar el plan.

Dividendo ciudadano

El Dividendo ciudadano de Mazzucato se trataría de una reserva de la riqueza que compartiría toda la población de forma colectiva. Así, los ciudadanos percibirían una participación directa en lo que produce un país. Casos como el petróleo de Alaska o una propuesta en California sobre un dividendo por los beneficios obtenidos por los datos personales serían dos ejemplos. Una real, otro no.

Feudalismo digital

En relación al uso y beneficio de los datos personales podemos hablar del *big data* y los algoritmos como un caso paradigmático de lo que ha llegado a definir como Feudalismo digital. La gravedad de la situación se da cuando corporaciones como Google, Amazon, etc. ya no se dedican a proveernos de nuevos bienes que pueden interesarnos, sino que ya saben más de nosotros que nosotros mismos. Además, que en sus análisis y propuestas perpetúan los roles de género o raza.

La propuesta de Mazzucato es usar, entre otras, toda la información de estas empresas para mejorar los servicios públicos que en estos momentos están, contrariamente, erosionando.

De hecho, el desarrollo de software de rastreo para hacer frente al Covid-19 fue muy dispar dependiendo de si se habían hecho inversiones públicas anteriormente para hacer frente a crisis y emergencias sanitarias.

Cadena de suministro

Debemos entender que sin la previa inversión pública en tecnología (satélites, líneas de telefonía...) no se hubiesen podido desarrollar muchas grandes corporaciones. Google, la pantalla táctil, el GPS, el reconocimiento de voz o el Tesla no existirían sin una inversión pública inicial en investigación.

Este argumento, la cadena de suministro, ha sido objeto de críticas, como apuntaremos más adelante, por la economista liberal McCloskey. Irónicamente, el también liberal Guy Sorman cita como ejemplo de políticas acertadas en Europa, la desregularización de algunos sectores por parte de la Comisión Europea que coinciden con los que Mazzucato señala como beneficiados por la “cadena de suministro”.

Asociación público-privada. Interés general

Su reivindicación de convertir los debilitados Estados en “Estados emprendedores” que inviertan en innovación, en sanidad pública y energías renovables, pero sobre todo que aprendan a negociar con las empresas privadas para que cualquier inversión de dinero público que reciban acabe revirtiendo en la sociedad.

Mazzucato hace un repaso de la inversión pública que, mediante asociación público-privada o subvenciones, se ha hecho en los últimos años para investigar centrándose en las vacunas. Denuncia la ausencia de una dirección común, unas reglas basadas en objetivos de interés público por una parte y, exige compartir los resultados de las investigaciones de las corporaciones frente a la competencia cerrada actual.

Es aquí donde la catedrática defendía que sean las autoridades nacionales, el Estado, las que dirijan toda la investigación además de asegurar un acceso universal de vacunas como la de Covid-19 evitando que vuelva a repetirse lo ocurrido con la crisis del SARS en 2003 que pese a la inversión de más de 700 millones de dólares por el gobierno de EEUU, la vacuna tiene un precio demasiado alto para gran parte de la población.

Por lo tanto, estamos ante una reivindicación de un doble papel del Estado a la hora de negociar. Por una parte, que los beneficios económicos repercutan en la sociedad, por otra, que la sea el interés general quien oriente las investigaciones. Lo que encuadraríamos en dos de las tres funciones generales que hemos atribuido al Estado.

Política verde

Mazzucato es creadora del Instituto para la Innovación y el Propósito Público (IIPP) en el University College de Londres, entidad que trabaja para que los gobiernos salgan de rincón en que se ocultaron en la década de 1980 y actúen no solo reaccionando ante las crisis sino tomando las riendas de una nueva relación entre empresa privada y sector público para conseguir, como mínimo, los objetivos marcados en el Acuerdo de París. El mercado de por sí no va a encontrar una solución verde, la innovación debe ir de la mano de la regulación y el papel director del Estado.

Así, de hecho, podemos constatar que la iniciativa europea por la Economía Circular, en principio, no solo se ha transformado en un paquete de ayudas para empresas. sino que se ha plasmado también en forma de leyes nacionales.⁸

La desigualdad. Hogares en la brecha digital

Otra consecuencia del abandono de los Estados en su función de asegurar que el progreso, sobre todo de los más desfavorecidos, se ha visto en la pandemia cuando en tantos hogares el derecho a la educación lejos de ser una realidad se ha quedado en papel mojado; muchos escolares no han podido seguir las clases on-line. La brecha digital en los sectores sociales más empobrecidos de países ricos nos obliga a repensar sobre la necesidad de políticas públicas que atiendan a los más desfavorecidos garantizándoles, al menos, el derecho a algo tan básico como la educación.

La economista defiende el apoyo del Estado a las familias en la condonación de las deudas incluso que aporte ayudas a las más necesitadas.

Redistribución. Nueva política fiscal y subsidio

Al igual que Piketty, Mazzucato reclama la necesidad de financiar debidamente al Estado. Deshacer la senda de la revolución *reaganiana* o *tatcheriana* y asumir que hace falta un sector público que nos auxilie como ha demostrado esta crisis, inicialmente, sanitaria. Una vez más una economista nos recuerda a Roosevelt, Keynes y el New Deal vuelven a ser la lección de la historia que no deberíamos olvidar.

La idea defendida por la profesora consiste en reformar el concepto de subsidio involucrando a les empresas y a los mismos trabajadores además de la administración.

⁸1 En 2022 se publicó la Estrategia Española para la Economía Circular, Planes de Acción y la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. <https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/economia-circular/estrategia>

En su idea de Gran Pacto para una Constitución Fiscal nueva pretende, de forma análoga a lo que apuntaba Keynes, escapar de las viejas políticas y iniciar una política fiscal donde se prime tanto “el ritmo como la dirección”. Es decir, erradicar la especulación y que esté presente siempre el largo plazo, la estabilidad de empleos y negocios, pero también en el problema grave ambiental.

Conclusión

La crisis nos trae la necesidad de un Estado capaz de ayudar a la gente, a las empresas y de reforzar los servicios sanitarios; revitalizar la inversión, la innovación y cambiar la manera de llevar a cabo la colaboración público-privada. No se trata de más Estado o menos, sino de mejor Estado, de un Estado diferente.

El sector público no solo debe corregir los fallos del mercado, sino que también debe formar el mercado teniendo siempre presente la perspectiva del largo plazo. Esta propuesta para salvar el capitalismo, evitar nuevas crisis y, en todo caso, poder afrontarlas necesita de un Estado que recupere plenas competencias y salga del repliegamiento al que ha sido condenado por los políticos occidentales desde las últimas décadas del siglo pasado para empezar a orientar la actividad económica con grandes objetivos a cumplir, las “misiones”.

5. McCLOSKEY, CONTRA EL ESTATISMO

Si hablamos del intervencionismo estatal en pro de la regulación o la distribución y buscamos economistas actuales reacios no podemos pasar por alto a Deirdre McCloskey. Esta economista e historiadora se opone a toda forma de “mangoneo” del Estado: en esos términos.

La oposición al papel del Estado de la profesora de la Universidad de Chicago no solamente abarca el ámbito de la economía como puedan ser políticas fiscales, especialmente si tienen como finalidad la redistribución; las regulaciones de negocios y profesiones, así como las protecciones. McCloskey se opone a toda forma de control público o estatismo, venga de donde venga. No solo en la economía enarbola su bandera personal de la libertad¹.

El Estado no puede planificar la economía

Centrándonos en lo que serían las políticas económicas, McCloskey entiende que a medida que las sociedades van haciéndose más complejas, planificar su economía se convierte en algo peor que una quimera, algo imposible. Esta idea de la economista se resume en su frase: “Confiar en el mercado es apostar por el esfuerzo de todas las mentes creativas” (McCloskey, 2022) es el argumento que usa para defender el *laissez-faire*, la idea de *que se encargue el mercado* que tanto critican por simplista la izquierda según ella.

La destrucción creativa y la innovación son lo único que hay que proteger, dicho lo cual se entiende que bien pocas reglas hacen falta más que aquellas mínimas que aseguren el cumplimiento de contratos y poco más.

Contra la protección

Se trata de una forma de intervencionismo que dificulta la deseada competencia y, en todo caso, solo ayuda a los monopolios de empresas y profesionales, también enemigos de esa sana competitividad empresarial.

Las medidas proteccionistas como son los aranceles que la derecha⁹ y la izquierda quieren imponer acomodan al inversor, desincentivando la innovación que es el germen del capitalismo y favorecen al monopolio de empresas y profesionales.

Contra la regulación del Estado

Guy Sorman explica en su comparativa entre la economía liberal americana y la intervencionista europea continental que “el papel del poder público en EEUU no es proteger a las empresas existentes, sino facilitar el ingreso al mercado de las innovadoras” (Sorman, 2008) y compara el número de tramites, días de retraso

⁹1 Los liberales para Deirdre McCloskey no son la derecha ni a izquierda

e importe inicial necesarios para crear una empresa nueva en EEUU y en Francia. Las diferencias en el momento de escribir su libro eran notables.

Para McCloskey, el exceso de regulación y de intervención administrativa favorece la captura de rentas. Los liberales no han sido capaces de introducir esta idea en la sociedad: cuanto mayor y más complejas sean estas rentas capturables, mayor será la competencia por capturarlas, mayores serán los recursos malbaratados en su captura y, por lo tanto, mayor será el daño para el bienestar social. Las sobrerregulación es el terreno donde mejor se mueven los monopolios. Tanto los gremiales como los de sectores estratégicos de gran importancia como energía o comunicaciones.

La falacia de la cadena de suministro

Entendiendo por falacia del suministro la idea de que las inversiones públicas iniciales, son la condición necesaria para el desarrollo urbano y que, además, estas inversiones estatales en grandes infraestructuras o investigaciones son necesarias para el progreso.

McCloskey se pregunta por qué habiendo existido anteriormente planificación en países como China el desarrollo no ocurría y afirma que la condición o causa es haber apostado por la iniciativa privada, dando libertad al promotor para edificar. Por eso se da a partir de 1991 en China. Es este una de sus críticas y punto de desacuerdo como habremos advertido con Mazucato quien precisamente usa este argumento para amparar moralmente su propuesta de *dividendo ciudadano*.

La economista liberal va más allá o, mejor dicho, tiene una visión diametralmente opuesta. Las inversiones estatales no deberían ni existir. Si cualquier inversión en infraestructuras como los trenes de alta velocidad es rentable, ya las hará el mercado y las costeará el usuario.

Contra la redistribución de Estado

Para McCloskey, la redistribución es de un solo uso, puesto que se consigue con una política fiscal fuerte y esto provoca un “efecto huida” de los inversores hacia otro país. Y hay países que se han especializado en recibirlos.

Piketty, como ya hemos visto, también presta atención a este problema. Se trata de la competencia fiscal y es uno de los argumentos en favor de su propuesta de crear impuesto sobre el capital, precisamente, mundial.

Es evidente que ambos economistas alertan sobre el problema de la libertad de capitales o inversiones en una economía globalizada pero, desde luego, no coinciden en la solución que cada cual da al problema. Aunque más bien podríamos decir que Piketty propone una solución que, reconoce difícil de llevar a la práctica, aunque defiende la viabilidad de su implantación por fases mientras que McCloskey “resuelve” el problema eliminándolo: si las empresas huyen de los impuestos, los quitamos.

Sobre la redistribución, McCloskey reflexiona sobre un aspecto ético que chocaría con el individualismo. A nadie le gusta llegar a graduarse, conseguir un buen trabajo, seguir esforzándose por encontrar un empleo más remunerado para acabar contribuyendo al subsidio de los que quizás no se esfuerzan. Sin duda que en el trasfondo subyace esa visión calvinista americana que tan bien describe Guy Sorman “En EEUU se sospecha que una persona pobre no trabaja lo suficiente para salir de esa situación mientras que en esta Europa católica o marxista” una persona pobre es percibida como una víctima del trabajo (Sorman, 2008:301).

En definitiva, la distribución es un problema o error desde el punto de vista económico o práctico y, también desde un punto de vista ético para McCloskey, aunque resulta mucho más interesante la comparación cultural del franco-estadounidense Sorman.

El mismo Sorman, cuando repasa estas diferencias a ambos lados del continente, cuestiona la utilidad de la redistribución que llevan a cabo los Estados europeos al recordar que, pese a las ayudas públicas a los pobres, la pobreza no haya desaparecido todavía en Europa.

La acusación de la historiadora y economista en su doble condición ha lanzado va más lejos. Según ella, derecha e izquierda tienen claro que en la distribución siempre se debe beneficiar a las clases medias que dominan las urnas. Con lo cual, la pretendida justicia social que Bismark expropió a la socialdemocracia

queda en entredicho. Y la preocupación por los parias, dudosa. Todas estas ayudas acaban siendo una suerte de proteccionismo clientelar (subsidios agrícolas, aranceles...)

Contra todo proteccionismo

Hemos introducido el proteccionismo del Estado con las empresas locales, pero McCloskey critica todo proteccionismo de izquierdas y derechas, afecte a empresas, profesionales libres o trabajadores. El proteccionismo para ella es populismo o nacionalismo, por perjudicar la competencia libre que es la única vía de obligar a que las empresa y profesionales de cada país mejoren en un mundo (mercado empresarial, profesional y laboral) sin fronteras. Sin fronteras para industriales, médicos o jornaleros.

A esta idea Guy Sorman en su crítica contra el proteccionismo europeo llega a afirmar que, si los gobiernos europeos dejaran funcionar a los mercados, desaparecerían un mayor número de empresas, pero podrían crearse muchas más” recuperándose el empleo incluso la calidad de éste (Sorman, 2021:304).

En su libro, Sorman se hace eco del fracaso de propuestas de economistas para acabar con los sistemas de subvenciones comprando las actividades (agrícolas principalmente) con el dinero que esperan recibir de subvenciones en 10 años, por ejemplo; innovar, vender unas y hacer más viables las otras posteriormente... También expone otras propuestas para la compra de licencias como el taxi para negociar posteriormente consiguiendo tarifas más baratas etc.

El desempleo y la libertad de mercado

Para McCloskey una de las medidas que deberían tomar los gobiernos para reducir el desempleo, sobre todo el paro juvenil, es eliminar el salario mínimo. Éste actúa como barrera impidiendo que se pueda, aunque sea inicialmente, contratar a jóvenes si experiencia. No se hace eco en este punto de las políticas que en Europa se llevan a cabo regulando mediante becas o contratos de aprendizaje aunque se puede entender que también son una forma de intervencionismo y subvención pública indeseable desde la óptica suya.

El paro según McCloskey se resuelve con la adaptación a nuevas necesidades, ni exprimiendo al “capitalista”. Respecto a lo que denomina el desempleo tecnológico, recuerda que el fin de la economía es producir, no conservar empleos. La innovación como ya se ha dicho, se basa en la “destrucción creativa”, por lo tanto, este “desempleo” siempre ha sido inevitable. El Estado no debe proteger al trabajador con subsidios. Además, el trabajador debe reciclarse por su cuenta, él es quien sabe qué quiere y necesita. Los subsidios masivos son una injusticia para el resto de los trabajadores y una ruina para el conjunto.

Esto nos recuerda a una de las patas del Programa de Empleo Público de Mazzucato: la formación profesional para el personal desempleado pensando en el largo plazo de la economía. También la formación como condicionante o estímulo a las empresas receptoras de ayudas. Es evidente que, en ambas economistas, McCloskey y Mazzucato, coinciden en ver la necesidad de mejorar las capacitaciones del desempleado. Discrepan evidentemente, en lo de siempre: en quien debe costearlo. Para Mazzucato debe ser el Estado y la empresa, para McCloskey, el desempleado debe buscarse la vida porque él sabe mejor que nadie qué necesita. Podría objetarse que seguramente los más excluidos probablemente ni lo sepan ni tengan recursos ya.

Stiglitz por contra considera que los salarios como los precios no reaccionan a los cambios del mercado tan rápidamente como argumentan los economistas liberales y, precisamente, por ello defiende una política de estabilización del gobierno además de los bancos centrales en busca de una eficiencia mayor de acuerdo con Pareto.

Conclusión

Las ideas liberales de Deirdre McCloskey y otros como Guy Sorman son claramente contrarias a cualquier papel del Estado en la economía que no sea el de garantizar un marco legal mínimo para que se cumplan los acuerdos comerciales y se respete la propiedad privada.

La planificación, las restricciones, los aranceles y prohibiciones desde los despachos ministeriales sean socialdemócratas o de derechas se venden bien electoralmente por ser medidas populistas, pero a medio y

largo plazo tienen efectos nocivos sobre la economía.

Las ayudas a empresas no son una solución, al contrario, un problema. Las ayudas sociales solo son una forma de comprar los votos de la clase media. Las protecciones a sectores son un atentado a la libre competencia que tiene por objetivo bajar los precios de forma inmediata e indiscutible.

6. BIBLIOGRAFÍA

1. Mazzucato, Mariana 2021, “No desaprovechemos esta crisis”. Galaxia Gutenberg.
2. McCloskey, Deirdre 2019 “¿Por qué el liberalismo funciona?”. Deusto.
3. Piketty, Thomas 2014, “El capital en el siglo XXI”. Madrid, Fondo de Cultura Económica.
4. Sorman, Guy 2008, “La economía no miente”, Madrid, Ed. Fundación FAES, SL
5. Stiglitz, Joseph E. 2020, “El capitalismo progresista”. Penguin Random House Grupo Editorial.
6. Vergés, Joaquim. “Balance de las políticas de privatización de empresas públicas en España (1985-1999)”. Ministerio de Industria, Comercio y Consumo, 1999 <https://www.mincotur.gob.es/Publicaciones/Publicacionesperiodicas/>